

República de Colombia



JUZGADO VEINTIDÓS DE FAMILIA
Carrera 7 No. 12 C – 23, teléfono 6013419906
Correo electrónico: flia22bt@cendoj.ramajudicial.gov.co

Bogotá D.C., siete (7) de diciembre de dos mil veintiuno (2021)

INCIDENTE DE MEDIDA DE PROTECCIÓN

110013110022-2021-00765-00

ERIKA MARCELA RODRÍGUEZ contra CARLOS ANDRÉS CARRERA ARÉVALO

I – Asunto

Procede el Juzgado a decidir el grado jurisdiccional de consulta al que se encuentra sometido el fallo proferido por la COMISARIA ONCE DE FAMILIA – SUBA II, dentro del incidente por incumplimiento de la medida de protección promovida por la señora ERIKA MARCELA RODRÍGUEZ contra CARLOS ANDRÉS CARRERA ARÉVALO

II – Antecedentes

1. Consideración preliminar

La señora ERIKA MARCELA RODRÍGUEZ solicitó medida de protección el día 27 de febrero de 2019, contra CARLOS ANDRÉS CARRERA ARÉVALO ante la COMISARIA ONCE DE FAMILIA – SUBA II, aduciendo conductas tipificadas como agresiones físicas, verbales y psicológicas en contra de ella. (p. 5).

Por auto de la misma fecha la Comisaría de Familia admitió la solicitud de medida de protección, otorgó medida provisional de protección y citó a las partes para audiencia de trámite (pp. 15 y 16).

La autoridad administrativa en audiencia celebrada el 5 de marzo de 2019, luego de que el accionado aceptara parcialmente los cargos, resolvió imponer medida de protección a favor de la denunciante y su hijo menor de edad NICOLÁS CARRERA RODRÍGUEZ (pp. 31-36).

2. Del incumplimiento a la medida de protección.

El día 5 de abril de 2021, la señora ERIKA MARCELA RODRÍGUEZ se presenta refiriendo presunto caso de desacato de la medida de protección. Pasa a nivel especializado para trámite respectivo y se identifica en sistema MP : 086-2019 (p. 81).

La Comisaría de Familia, mediante providencia de la misma fecha admitió la solicitud de incumplimiento a la medida de protección y citó a las partes para audiencia de trámite (pág. 85-86).

En audiencia de instrucción y juzgamiento del 13 de abril de 2021, la Comisaria de Familia luego de escuchar a las partes en conflicto, declaró probado el primer incumplimiento por parte de CARLOS ANDRÉS CARRERA ARÉVALO, sancionándolo con tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv), advirtiendo al infractor sobre las sanciones, en caso de volver a incumplir dicha medida y ordenó la remisión de las diligencias en grado jurisdiccional de consulta al Juzgado de Familia (pp. 101-105).

III. Consideraciones del Despacho:

1. Premisa normativa

La violencia intrafamiliar suele estar relacionada con diversas *causas “culturales, sociales, económicas, religiosas, étnicas, históricas y políticas que vulneran la dignidad humana”*, pero la violencia históricamente ha estado inmersa en relaciones de dominio y poder entre hombres y mujeres, es por tal razón que distintas disciplinas han unido esfuerzos para promover la igualdad entre géneros y poder reducir los actos violentos al interior de las familias.

Es por ello que, la comunidad mundial consciente de dichos problemas sociales y en especial la discriminación que se dirige contra las mujeres ha desarrollado importantes tratados e instrumentos jurídicos para la protección de cualquier tipo de violencia de género, tal es el caso de la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación de la Mujer (CEDAW 1981), la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer (1993); y la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995).

Siguiendo la misma preocupación e interés, la Organización de los Estados Americanos (OEA), en la Convención de Belém do Pará (1995), prohibió todo tipo de discriminación contra la mujer y dotó de parámetros jurídicos a todos los estados adscritos a esta organización para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, verbigracia el artículo 1º de Declaración de la ONU sobre la Eliminación de la Violencia (1993) define así la violencia contra la mujer *“se entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un*

daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”.

Sentadas la anteriores precisiones la violencia familiar es un fenómeno social que atenta contra la unidad familiar y comprende *“todo daño o maltrato físico, psíquico o sexual, trato cruel, intimidatorio o degradante, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión, producida entre miembros de una familia, llámese cónyuge o compañero permanente, padre o madre, aunque no convivan bajo el mismo techo, ascendientes o descendientes de éstos incluyendo hijos adoptivos, y en general todas las personas que de manera permanente se hallaren integrados a la unidad doméstica.”*

En ese mismo sentido en el marco de los Derechos Humanos se ha encuadrado la violencia intrafamiliar *“como aquella acción realizada al interior de la familia por uno de sus miembros, que lesionan y amenazan la vida, la integridad, la autonomía, la libertad individual y la dignidad humana de quienes la integran”*, es decir, son aquellos actos los que producen daños físicos o psíquicos, la tortura, el trato cruel - intimidatorio o degradante - la agresión, el maltrato, la amenaza, el ultraje, el agravio y cualquier otra forma de agresión, es por tal razón que todos los estado deben proscribir toda conducta que atente, amenace o vulnere la integridad familiar.

Acogiendo los conceptos y el interés internacional el Estado Colombiano mediante la ley 51 de 1981 adoptó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en la cual todos los países integrantes condenaran cualquier tipo y forma de segregación dirigida a la mujer.

Mediante la Ley 248 de 1995, la República de Colombia adoptó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de' Belém Do Pará".

En consecuencia, el artículo 93 de la Constitución Política indica que *“Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno”*, dichos tratados conforman lo que se conoce como el Bloque de Constitucionalidad, es decir la normas, tratados y convenios internacionales aprobados y ratificados por Colombia se integrarán al mandato superior interno y tendrán la misma relevancia e importancia que el derecho Constitucional interno.

Con la expedición de la Ley 294 de 1996, se materializó el artículo 42 de la Constitución Política de Colombia, puesto que se establecieron las normas para prevenir, remediar y sancionar cualquier tipo

de violencia familiar, a través de esta normativa las autoridades fueron provistas de directrices jurídicas para proteger al grupo familiar e imponer ciertas medidas.

Dentro de las medidas de protección a la que puede acudir la víctimas, vale resaltar las siguientes (i) ordenar al agresor el desalojo de la casa de habitación que comparte con la víctima; (ii) ordenar al agresor abstenerse de penetrar en cualquier lugar donde se encuentre la víctima; (iii) ordenar al agresor el pago de los gastos médicos, psicológicos y psíquicos que requiera la víctima; (iv) y ordenar una protección temporal especial para la víctima por parte de las autoridades de policía, tanto en su domicilio como en su lugar de trabajo.

Posteriormente la Ley 575 del año 2000, reformó la Ley 294 de 1996, en el sentido que amplió dichas directrices jurídicas y otorgó facultad a los Comisarios de Familia, permitiéndoles la imposición de medidas de protección provisionales o definitivas contra el agresor, la solicitud de pruebas periciales, la orden de arresto y todas aquellas funciones inherentes a la protección y prevención de todas las formas de violencia intrafamiliar.

Con respecto a las sanciones que resultan como consecuencia del incumplimiento de las medidas de protección se tiene inicialmente la multa, la cual es definida por la Corte Constitucional¹ como: *"Una manifestación de la potestad punitiva del Estado que refleja el monopolio del poder coercitivo y el reproche social de la conducta de quien quebranta el orden público"*².

Igualmente ha dicho que la multa: *"constituye, por regla general, una sanción pecuniaria impuesta al particular como consecuencia de una conducta punible o por el incumplimiento de un deber y, como toda sanción, sus elementos esenciales deben estar determinados en una ley previa a la comisión del hecho de que se trate, incluyendo la cuantía y el respectivo reajuste"*³.

La competencia para definir sus elementos estructurales, las condiciones para su imposición y la cuantía es del Estado, el sentido de su aplicación se da con el fin de forzar ante la intimidación de su aplicación, al infractor a fin de que no vuelva a desobedecer las determinaciones legales y como su carácter es pecuniario, se convierte en un verdadero crédito a favor del Estado. Sin embargo, la jurisprudencia ha aclarado insistentemente que *"el origen de la multa es el comportamiento delictual del individuo, no su capacidad transaccional, y su finalidad no es el enriquecimiento del erario, sino*

1 C-185 de 2011 M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto

2 C-194 de 2005 MP Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.

3 C-390 de 2002 MP Dr. Jaime Araujo Rentería.

la represión de la conducta socialmente reprochable"⁴. Tampoco tiene el alcance de una carga pecuniaria de naturaleza resarcitoria que persiga reparar el daño provocado por el delito.

2. Caso concreto.

El presente trámite tiene por objeto verificar si el denunciado CARLOS ANDRÉS CARRERA ARÉVALO, ha acatado las órdenes impartidas por la COMISARIA ONCE DE FAMILIA – SUBA II de esta ciudad en la medida de protección No. 086-2019, o si, por el contrario, se ha hecho merecedor de las sanciones impuestas en la providencia que se consulta, por haber incumplido el incidentado la medida de protección aplicada.

En este sentido, debe señalarse que del análisis de los hechos expuestos en la solicitud y de las pruebas recaudadas, deberá confirmarse la sanción imputada por la Comisaría de Familia.

En efecto, la COMISARIA ONCE DE FAMILIA – SUBA II en diligencia de audiencia programada con antelación, debidamente notificada y a la cual comparecieron las partes, resolvió imponer como sanción multa de tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv) al señor CARLOS ANDRÉS CARRERA ARÉVALO, con fundamento del análisis en conjunto de las diligencias y declaraciones de la incidentante, del incidentado, y del dictamen de Medicina Legal, entre las que se destacan, las siguientes:

En primer lugar, los cargos endilgados al victimario en la denuncia, a saber: *"El día 02 de abril de 2021 a las 12 de la noche llegó Carlos borracho, empezó a colocar música duro y yo le dije que no porque mi hijo estaba ahí y él me dijo que me importaba y colocó la música, el niño le dijo tranquilo papi, bájele y él escuchó como 5 minutos de música ya apagó todo, se dirigió a la cocina y me preguntó qué había comido y yo le dije que salchipapas y empezó a golpear las ollas y a tirar todo, entró a la habitación y cerró la puerta y cogió a puños el televisor al igual que al computador, en ese momento yo me levanté y le dije por favor Carlos no me dañe las cosas cogió y me lanzó al piso en un colchón, y me puso la rodilla en el pecho y me lanzo tres puños y me alcanzo a pegar en los brazos y yo en el forcejeo le lancé y tiene unos rasguños en el pecho y el niño empezó a decirle suelte a mi mamá y él reaccionó y me soltó, entonces él arrancó el tv de la pared y se lo llevó a la terraza a lanzarlo y le dije no lo lance, el lanzo el tv por la terraza y después me cogió de la camisa y me hizo contra el vacío y mi hijo se asomó por la ventana y le dijo suelte a mi mamá y el reacciono y me soltó, bajo los escaleras y hecho el tv a la basura y dijo que no iba a dejar evidencia para que no lo jodiera*

4 C-194 de 2005 MP Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.

y regreso y se acostó a dormir y yo llame al 123 y nunca llegó y me acerqué al CAI La Gaitana y allí solo había un policía y me dijo que esperará que mandarían una patrulla y Carlos ahora dice que estaba ebrio y no se acuerda de nada y yo tengo evidencias de lo que pasó”.

De igual manera, la ratificación de la denuncia presentada por la señora ERIKA MARCELA RODRÍGUEZ, quien manifestó: “El sí me golpeo, me pego puños, yo fui a medicina legal, cuando el lanzo el televisor por la terraza yo si estaba con él, las palabras de él fueron que él no iba a dejar evidencia. Si me dió puños en los brazos (...)”.

De igual forma, el dictamen del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en el cual se concluye: **“EXAMEN MÉDICO LEGAL** Descripción de hallazgos - Miembros superiores: Equimosis moderada violácea de 3.5 x 4 cms en tercio distal anterior de brazo izquierdo. Equimosis moderada gris violácea de forma irregular, bordes difusos de aproximadamente 3 x 4 cms en tercio medio posterior de antebrazo del mismo lado izquierdo. Dos equimosis grisáceas leves de hasta 1 x 0.5 cms en tercio distal anterior de antebrazo izquierdo. Equimosis leve grisácea tenue con edema palpable de 3 x 2 cms en tercio distal posterior de brazo derecho. Sin limitación funcional. **ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y CONCLUSIONES** Al examen presenta lesiones actuales consistentes con el relato de los hechos. Mecanismo traumático de lesión: Contundente. Incapacidad médico legal DEFINITIVA OCHO (8) DÍAS. Sin secuelas médico legales al momento del examen.”

Por otra parte, de los descargos del denunciado quien aceptó los hechos de violencia enrostrados. En efecto, en su relato indicó: “yo acepto que dañe el televisor, le dí un puño en una esquinita, y ella empezó a agredirme, me rasguñó el cuello y me arrancó la camisa, yo le decía que se calmara, yo la tomé de los brazos duros y por eso le quedó los brazos negros (...)”, declaración que no es otra cosa que la confesión que, dicho sea de paso, cumple a cabalidad con los requisitos exigidos por el artículo 191 del Código General del Proceso.

En esta oportunidad, ha quedado demostrado que el señor CARLOS ANDRÉS CARRERA ARÉVALO, ha desatendido la medida de protección que le fuera impuesta por la Comisaria de Familia al agredir física, verbal y psicológicamente a ERIKA MARCELA RODRÍGUEZ, como se desprende de la denuncia y de los descargos del implicado, quien aceptó que perpetró actos de violencia en contra de la incidentante.

Con lo anterior, no cabe duda a este Despacho que del análisis de los medios de prueba que fueron arrojados a la autoridad administrativa se puede evidenciar con certeza que los presupuestos fácticos exigidos por el legislador para sancionar a CARLOS ANDRÉS CARRERA ARÉVALO se han

presentado, razón por la cual esta sede judicial confirmará la decisión adoptada por la Comisaría de Familia.

Por lo expuesto, el JUZGADO VEINTIDÓS DE FAMILIA DE BOGOTÁ, D.C., administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley;

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la providencia de fecha 13 de abril de 2021 proferida por la COMISARIA ONCE DE FAMILIA – SUBA II, dentro del incidente de desacato promovido por la denunciante ERIKA MARCELA RODRÍGUEZ contra CARLOS ANDRÉS CARRERA ARÉVALO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.007.248.991 por las razones expuestas en la motivación de este proveído, en la que se impone como sanción a la incidentada la multa de tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

SEGUNDO: COMUNICAR vía electrónica lo aquí decidido a las partes involucradas.

TERCERO: DEVOLVER las diligencias a la Comisaría de origen, una vez se encuentre ejecutoriada la presente providencia. OFICIAR

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



JOSÉ RICARDO BUITRAGO FERNÁNDEZ
Juez